Y RESULTANDO:

1. Que, a fs. +++/+++ vta., el señor +++, con el patrocinio letrado de la Dra. +++, promovió una acción de amparo en contra de la Obra Social +++ (en adelante, +++), con el fin de que se la condene a suministrar el medicamento “Infliximab”, necesario para tratar la dolencia que padece, y ante la negativa infundada de la demandada de proveérselo.

Para fundar su pretensión, luego de justificar la competencia de esta Sala y la legitimación activa y pasiva, dijo que la conducta desplegada por la parte demandada era ilegítima, en razón de que el medicamento era necesario, para continuar con el tratamiento médico que recibía, y que había sido solicitado por el Dr. +++, médico de la obra social accionada. Explicó que la obra social suministró la primera dosis de la medicación, pero luego no dio cumplimiento a la prestación. Expresó que, ante ello, efectuó numerosos reclamos, y que la demandada respondió con evasivas. Relató, además, que ingresó a la obra social el 17 de marzo de 2010; que siempre cumplió con las obligaciones que estuvieron a su cargo; que se realizó diversos estudios médicos, por una dolencia que sufría en el estómago; que, finalmente, en el año 2014, le detectaron que padecía colitis crónica severa en actividad, con hallazgos sugestivos de colitis ulcerosa idiopática; que, debido al diagnóstico, desde la misma obra social lo derivaron al Sanatorio ‘Sagrado Corazón’, de la ciudad de Buenos Aires, donde lo internaron y suministraron la medicación que su cuadro requería; y que, finalmente, en este contexto, es que se le suministró la medicación cuya cobertura ahora reclama, por un período de dos (2) años. Manifestó que, ante el incumplimiento, intimó a +++ mediante la remisión de una carta documento, que reprodujo en forma textual, que nunca fue respondida. Aludió a los derechos que estaban afectados, por el obrar de la demandada. Citó jurisprudencia; introdujo la cuestión federal; y ofreció prueba.

2. Al ser declarada la admisibilidad de la acción intentada, por el mismo acto, se ordenó requerir el informe que prescribe el ordenamiento

procesal a +++ . La demandada, a pesar de estar debidamente notificada —tal como da cuenta la cédula incorporada a fs. +++ y vta.—, no compareció ante esta instancia y tampoco, por ende, evacuó el informe requerido. Ante ello, corresponde que se le dé por decaído el derecho dejado de usar y se constituya su domicilio procesal en la Secretaría de actuaciones.

3. En tal estado y con el dictado del decreto de autos, la causa quedó en condiciones de dictar sentencia. Aclaro que, al momento de ser emitido este pronunciamiento, el decreto de autos no se encuentra firme.

No obstante, dada la urgencia de la materia; los derechos que se encontrarían afectados; y la proximidad de la feria judicial, dictaré igualmente la sentencia, en aras de garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia.

Y CONSIDERANDO:

I. La síntesis efectuada en el considerando precedente evidencia que la cuestión central que debo resolver consiste en determinar si la conducta desplegada por +++, al no proveer la medicación que el cuadro médico que presenta el amparista requiere, puede ser calificada de arbitraria o ilegal.

II. Ello es así, por cuanto el artículo 43 de la Constitución Nacional, en su primer párrafo, establece que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. Debo resaltar que los artículos 28 de la Constitución Provincial y 380 del CPC contienen una regulación similar a la que contiene la Carta Magna Nacional.

Conforme lo anterior, para que la acción proceda es menester que el acto u omisión sean manifiestamente arbitrarios o ilegales.

Un acto u omisión es arbitrario, cuando es contrario a la razón y la justicia; en tanto, es ilegal, si se opone al ordenamiento normativo. En ambos casos, la lesión, restricción, alteración o amenaza debe ser manifiesta, es decir, ostensible, patente, evidente, que surja del mero cotejo de los elementos agregados al expediente, pero sin que sea necesario desplegar una profusa actividad probatoria, para tener por configurado este extremo.

III. En el presente caso, se imputa a la demandada una omisión, consistente en no proveer la medicación médica recomendada. Se alega que esa medicación fue dispuesta por prescripción médica; que la obra social comenzó a proveerla; y que luego, sin mediar explicación alguna, la accionada interrumpió la prestación.

En mi concepto, lo expuesto por el actor quedó acreditado en el expediente.

En efecto, el señor +++ es afiliado de +++, en carácter de conviviente de la titular, señora +++; y registra, como fecha de alta, el día 17 de marzo de 2010 (ver copia del carnet de obra social agregada a fs. 2).

En el año 2014, por indicación del Dr. +++, se le practicó una biopsia de colon, que fue analizada por la Dra. +++ y que permitió que se diagnostique que padece colitis crónica severa, en actividad, con hallazgos sugestivos de colitis ulcerosa idiopática, y con displasia de bajo grado (cfr. informes médicos de fs. 3/5 y 6).

Ante ello, el Dr. +++, médico perteneciente a +++ —tal como se desprende de la prescripción médica incorporada a la causa—, solicitó que el amparista fuera internado de urgencia (ver copia de fs. 7).

La internación se produjo en el Sanatorio ‘Sagrado Corazón’ de la ciudad de Buenos Aires; nosocomio donde el paciente permaneció durante un lapso de once (11) días, por presentar una colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Allí, luego de practicarle diversos estudios, se decidió administrarle el medicamento “Infliximab”, en distintas dosis (ver copias de fs. 9/11 y 8). Ese medicamento, según lo consignado en la

copia del certificado que está agregada a fs. 12, debía ser suministrado, en la dosis de mantenimiento recomendada, cada ocho semanas y por un período de dos (2) años.

Debo tener por cierto que la medicación fue suministrada con regularidad; que la última dosis fue entregada en enero de 2016; y que, a partir de ese momento, la obra social dejó de proveerla, sin justificar el cambio de conducta que asumió.

Infiero lo anterior, no solo de la intimación que fue cursada por el amparista a la obra social, al remitirle una carta documento, de la que no hay constancias en el expediente que haya sido respondida —ver copias de fs. 17/18—; sino también del silencio que guardó el demandado, cuando se le requirió que emitiera el informe que prescribe el artículo 383 del CPC.

Esta conducta debe ser interpretada como un reconocimiento de los hechos contenidos en la demanda, en razón de que el artículo 383 del CPC expresamente dispone que “La falta de contestación podrá interpretarse como un asentimiento respecto a los hechos invocados en la demanda”.

Por aplicación de lo anterior, ante la omisión de contestar el informe que le fue requerido, debo tener por cierto: a) que +++ proveyó durante un año el medicamento necesario, para tratar la dolencia que padece el amparista; b) que, aunque suministró una dosis en enero de 2016, omitió después desplegar la actividad necesaria, para que el medicamento fuera entregado nuevamente al amparista; y c) que, desde la fecha señalada, sin mediar explicación alguna y a pesar de reiterados reclamos —extremo que también tengo por cierto e infiero del silencio que guardó el accionado—, la medicación no fue suministrada al señor +++.

IV. Lo anterior evidencia que la demandada, al dejar de suministrar en forma injustificada la medicación necesaria, para tratar la dolencia del actor, incurrió en una omisión, que restringió en forma indebida derechos fundamentales del amparista.

Sostengo lo expuesto, con fundamento en que el derecho a la salud, es un derecho constitucional, que está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, que es el primer y preexistente derecho de la persona humana, reconocido y garantizado tanto por la Constitución Nacional, como por diversos Tratados de Derechos Humanos, de rango constitucional, conforme lo normado por el artículo 75, inciso 22 de la Ley Fundamental (cfr. artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales; 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y CSJN, “D, DF c. CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas ‘Norberto Quirno’) s/ Amparo”, fallo del 29 de abril de 2014, publicado en La Ley 2014-D, 587). De igual modo, la Constitución de la Provincia de La Rioja reconoce el derecho a la salud en su artículo 59.

El pleno ejercicio de este derecho exige, entre otros aspectos, que se faciliten las condiciones, para el acceso efectivo al sistema de salud, en caso de enfermedades; y que los afiliados de las obras sociales puedan recibir la atención adecuada, para tratar la dolencia que padece; y que, desde luego, esta sea acorde con las prestaciones que están reconocidas y garantizadas por la ley.

En el caso, es evidente que la obra social no cumplió con ese deber que estaba a su cargo, pues, a pesar de que en un primer momento brindó la prestación, entregando la medicación prescripta —extremo que, como dije y reitero, se infiere del silencio que guardó en este proceso—, luego, sin mediar justificación, interrumpió la prestación.

Las máximas de la experiencia indican que, si ante un cuadro médico de gravedad, un facultativo prescribe una medicación, que debe suministrarse por un período determinado, y esa administración luego se interrumpe —tal como aconteció en el presente caso—, es probable que deriven

consecuencias negativas, para la integridad del paciente, y que, por ende, su derecho a la salud, se vea seriamente comprometido y afectado. Y no olvidemos que, dada la conexidad que existe entre ambos, si se afecta el derecho a la salud, también se pone en riesgo el primer y fundamental derecho, cual es el derecho a la vida.

Ante ello, es claro que la omisión en que incurrió la demandada es manifiestamente ilegítima, pues no solo es ilegal, sino que también es arbitraria —y de este modo respondo el interrogante que formulé al comienzo—.

Es ilegal, porque lesiona de manera evidente un derecho fundamental, reconocido por los artículos 33, 42 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 59 de la Constitución de la Provincia; como así también la norma que reglamenta el ejercicio y funcionamiento de las obras sociales, que exigen facilitar el acceso de los beneficiarios o afiliados a las prestaciones de salud (cfr. ley 23.660, ley 23.661, y disposiciones normativas y reglamentarias concordantes).

Y, es arbitraria, en razón de que, a pesar de que la medicación fue primero provista, después, de manera injustificada, sin mediar razones, y limitándose a guardar silencio, la obra social decidió no suministrarla, ni poner al alcance de su afiliado los medios necesarios, para que pudiera contar con ella. Esa omisión de proveer la medicación, sin lugar a equívocos, además de ser irrazonable, por no estar fundada en argumento alguno que la justifique, es claramente contraria a la justicia, porque impide que el amparista pueda gozar de la prestación que +++ tomó a su cargo, y que es indispensable, para que su salud pueda restablecerse por completo, y pueda así gozar en plenitud del derecho que el ordenamiento constitucional le reconoce.

Como corolario de lo expuesto, entiendo que asiste razón al amparista en su planteo y que, por ende, corresponde hacer lugar a la demanda articulada.

V. Por los fundamentos vertidos, juzgo que en el caso se impone:

1) Dar por decaído el derecho dejado de usar por +++, al no haber evacuado el informe en tiempo oportuno, y, como derivación, tener por constituido su domicilio en la Secretaría de actuaciones.

2) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el señor +++, en contra de +++.

3) En consecuencia, ordenar a la demandada +++ que, en forma urgente e inmediata, suministre al señor +++ el medicamento Infliximab, en la dosis y durante el lapso que fueron recomendados por el médico, en las condiciones y por el monto que efectuó la prestación, hasta antes que, en forma arbitraria e ilegal, interrumpiera el suministro. En el caso de que el amparista hubiera efectuado desembolsos, para no interrumpir su tratamiento, la obra social deberá reintegrar, de manera inmediata y luego de acreditada la erogación, los montos que hubieran sido abonados, en proporción a la cobertura que está obligada a brindar.

4) Imponer las costas generadas por la presente acción al demandado, por ser la parte que resultó vencida (conforme artículo 159 del CPC).

5) Regular los honorarios profesionales de la Dra. +++ en el mínimo legal, que equivale a diez (10) jus, esto es la suma de pesos +++ (\$ +++) por tratarse la materia debatida de una cuestión no susceptible de apreciación pecuniaria.

Por ello, la Sala Unipersonal 1 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas;

RESUELVE:

1°. Dar por decaído el derecho dejado de usar por +++, al no haber evacuado el informe en tiempo oportuno, y, como derivación, tener por constituido su domicilio en la Secretaría de actuaciones.

2°. Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el señor +++, en contra de +++.

3°.En consecuencia, ordenar a la demandada +++ que, en forma urgente e inmediata, suministre al señor +++ el medicamento Infliximab, en la dosis y durante el lapso que fueron recomendados por el médico, en las condiciones y por el monto que efectuó la prestación, hasta antes que, en forma arbitraria e ilegal, interrumpiera el suministro. En el caso de que el amparista hubiera efectuado desembolsos, para no interrumpir su tratamiento, la obra social deberá reintegrar, de manera inmediata y luego de acreditada la erogación, los montos que hubieran sido abonados, en proporción a la cobertura que está obligada a brindar.

4°. Imponer las costas generadas por la presente acción al demandado, por ser la parte que resultó vencida (conforme artículo 159 del CPC).

5°. Regular los honorarios profesionales de la Dra. +++ en la suma equivalente a diez (10) jus, esto es pesos +++ (\$ +++).

6°.Protocolícese y hágase saber.